



## Cuerpo de Traductores

---

### Intérpretes en la conquista española de América

**Piemonti, María Gabriela**

Cuerpo de Traductores UNR

Mail: [departamento\\_traduccion@unr.edu.ar](mailto:departamento_traduccion@unr.edu.ar)

#### Cómo citar este artículo:

Piemonti, Ma. Gabriela (2018). "Intérpretes en la conquista española de América". Trabajo elaborado en el marco del proyecto de investigación "El intérprete en los códigos nacionales de Argentina, Brasil y Uruguay", Cód. REC78, Centro de Estudios Interdisciplinarios, UNR.  
Disponible en: <http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/11361> (u.f.c.: [día/mes/año])

---

## Intérpretes en la conquista española de América

**Piemonti, María Gabriela**

Cuerpo de Traductores UNR

Mail: [departamento\\_traduccion@unr.edu.ar](mailto:departamento_traduccion@unr.edu.ar)

### Intérpretes en la conquista española de América

Si bien entre los pueblos americanos existía la interpretación (Rosenblat, citado por Bastin, 2003: 195)<sup>1</sup>, el interés del Estado en cuestiones de interpretación y traducción tiene una historia que para nosotros comienza con la llegada misma de los españoles a América y que se sostiene a lo largo de los años y las centurias.

Se trata para nosotros de una espinosa herencia de la dominación española que se comprueba en el peculiar interés que la Corona dio a la participación de intérpretes/traductores en todo el proceso de conquista y colonización de sus territorios de ultramar, más allá de las críticas de toda índole que a su actuación puedan hacerse en nuestros días, según los documentos que nos han llegado, y más allá también de las intenciones últimas de esa vinculación para cada una de las partes implicadas y del concepto de interpretación/traducción que hubieran podido tener los conquistadores, los aborígenes y los mismos intérpretes/traductores.

### Entenderse

Algunos autores sostienen que los españoles estaban movidos por un verdadero interés en darse a entender y entender a los aborígenes de las tierras conquistadas. Si bien en principio una idea semejante resulta al menos ingenua y pareciera idealizar a los protagonistas, lo cierto es que estas aseveraciones reclaman investigaciones amplias, profundas, interdisciplinarias y sistematizadas, con la que lamentablemente aún contamos en escasa cantidad y realizadas, también, fuera de nuestro ámbito académico.

Puede asegurarse, no obstante ello, que algunos (religiosos) tenían la determinación de entender a y hacerse entender por los aborígenes<sup>2</sup>, aunque no es posible extender tal afirmación a todos los sectores y protagonistas intervinientes en el proceso, mientras que sí

---

<sup>1</sup> Es de esperar que en un futuro próximo podamos contar con investigaciones en esta área, sin lugar a dudas más que necesarias en nuestro continente.

<sup>2</sup> Payàs Puigarnau (2010: 34) analiza en detalle el interés y las prácticas de los religiosos durante la conquista y colonización de América.

es posible analizar las políticas implementadas a partir del análisis de los resultados socio-históricos, los cuales a todas luces no dejan siquiera entrever ninguna voluntad por parte de los europeos de entender al otro americano.

Al mismo tiempo, tampoco es posible establecer una relación causal directa entre ese supuesto interés y la consiguiente sanción de normas legales sobre intérpretes/traductores, interpretación/traducción con la búsqueda de la “comunicación”, tal como podemos definirla hoy, con los aborígenes. En apoyo a esta tesis, especialmente para el período de la conquista, acordamos con las ideas de Alonso Araguás (2003) y Fossa (1992): ficción y representación atravesaron toda la vinculación entre europeos y americanos, algunas veces intervenida por los intérpretes.

Eran los avenidos intermediarios entre el europeo y el indígena, conocidos con distintos vocablos: “intérpretes” los llaman las Leyes de Indias, “lenguaraces” en el Río de la Plata, “lenguas” en Chile, “farautes”, “trujamanes”, “naguatatos”, “naguallatos”, “nabatatos”, “nahuatatos”, “naguatlates” o “nahuatlatos”, en México, Nueva Galicia y Yucatán (Boyd-Bowman; 1971).

“Intérprete” y “Lengua” son dos vocablos que el diccionario de la lengua de Sebastián de Cobarruvias publicado en 1611, ya registra con el significado de traductor/intérprete que tienen en la actualidad (Fossa; 1992).

“Faraute”, del francés *hérault*, ‘heraldo’ (Payàs & Garbarini, 2012: 353), fue muy utilizado por Hernán Cortés. Mucho más tarde, y en el lunfardo rioplatense, curiosamente se registra “farabute” o “farabuti” con el significado de “pícaro, de mal vivir, fanfarrón” (Gobello; 1994: 113), es decir, persona a la que resulta difícil creer no obstante dé la impresión de conocer o hacer bien algo. En su última versión disponible online, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define al “faraute” como: mensajero confiable (primera acepción); persona en general entrometida y manipuladora “que se atribuye autoridad en un asunto” (cuarta acepción, coloq.); e “intérprete” (quinta acepción, ant.)<sup>3</sup>.

“Trujamán”, “trujimán”, “trujumán” o “dragomán” era el intérprete que se desempeñaba en los consulados y embajadas europeas del cercano Oriente, en las aduanas o en las cortes orientales<sup>4</sup>, fundamentalmente en cuestiones de índole comercial y realizando lo que hoy llamamos “traducción a la vista” e “interpretación de tratativa o de enlace”.

“Naguatato”, “naguallato”, “nabatato”, “nahuatato”, “naguatlate”, “nahuatlato”, entre otras similares, son todas adaptaciones del azteca *nahuatlato*, “aquel que conoce la lengua náhuatl”.

Muchos fueron los lenguaraces y lenguarazas que actuaron en la vinculación entre americanos y europeos a lo largo de los siglos XV al XIX, pero no es posible nombrarlos a todos ni saber en tantos casos algo más que sus nombres. Algunos de ellos son: Agustina Quilchamal, Agustinillo, Alonso de Molina, Antonio Tomás, Ays, Blas de Pedrosa, Camilo

<sup>3</sup> Cfr.: <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=faraute> (ú.f.c.: 01/01/15).

<sup>4</sup> Cfr.: <http://www.treccani.it/vocabolario/dragomanno/>, *Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani*, traducción nuestra (ú.f.c.: 22/11/15).

Arias, Ciriaco, Cristóbal de Morales, Diego Colón, el Capitán Whittingham, el mestizo Bastías, el mestizo Meléndez, Enrique de Malaca, Enrique Montes, Estevancio, Eugenio del Busto, Felipillo, Francisco del Puerto, Francisco Mora, Francisquillo, Francisco Mora, Gerónimo de Aguilar, Gonzalo Calvo Barrientos, Gonzalo de Acosta, Guillermo White, Hernando de Ribera, Jerónimo Romero, Joan de Albarado, João Ramalho, Juan Antonio Martínez, Julianillo, la china Carmen, la comechingona Juana Urpina, la Malinche, la puelche «Lunareja», la puelche María López, Lautaro, Luis de Valdivia, Luis Gorosito, Martinillo de Poechos, Melchor Ramírez, Melchorejo, Orteguita, Pantaleón Sanchez, Pedro López, Pedro Riquelme, Santiago Avendaño, Vicente Capello<sup>5</sup>.

Para todos ellos, se los llamara como se los llamara, ya desde el comienzo de la conquista de los territorios de ultramar, la Corona española fue emanando normas tendientes a regular la actividad. Llama la atención el hecho de que aún en nuestros días, en muchas jurisdicciones, y también en la normativa nacional argentina, prácticamente todos los principios, condiciones y formalidades de entonces continúan vigentes. Veamos un poco en detalle el desarrollo de esta historia. Una historia, un relato, que no intenta establecer ninguna suerte de continuidad ni causalidad, sino algunas semejanzas y coincidencias. Para el caso, seguiremos fundamentalmente a tres autores cuyos análisis, investigaciones o reflexiones arrojan gran luz sobre los sucesos y la reglamentación que se iba instituyendo a medida que pasaba el tiempo y se hacía experiencia. Esos autores son Josep Peñarroja Fa (2004) para las cuestiones concernientes a los lenguaraces, Rodolfo E. Witthaus et al. (2000) y Víctor Tau Anzoátegui & Eduardo Martiré ([1967]1980), especialmente útil para la historia de los cambios institucionales<sup>6</sup>.

Bastin (2003: 194-195) divide “la historia de América en cuatro períodos principales:

- 1) el encuentro y la conquista (1492 – hasta 1521/1533),
- 2) la colonización (siglos XVI-XVIII),
- 3) la preindependencia y emancipación (finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX) y
- 4) la República (desde mediados del siglo XIX hasta hoy).

En estos cuatro períodos distingue “dos momentos claves de intensa actividad traductora: el encuentro y la conquista, por una parte, y los años de preindependencia y emancipación, por otra. Los otros dos períodos son mucho más largos y menos intensos, ya que se caracterizan por una actividad más estable, organizada y sistemática”.

---

<sup>5</sup> Estos nombres, así como las notas sobre sus biografías (cfr. Anexo) han sido extraídos de varios de los textos citados en Bibliografía. Para varias de las biografías cfr. Alonso Araguás (2005).

<sup>6</sup> En este trabajo nos detendremos sólo en la normativa del ejercicio de la profesión. En lo que respecta a la traducción en general, remitimos a los interesantísimos artículos de Georges L. Bastin (2003, 2004, 2011), en los que también se detalla una amplia bibliografía de referencia.

Coincidimos bastante con esta periodización aunque preferimos nombrar y dividir los períodos o etapas de modo ligeramente diferente:

- 1) choque y construcción de poder (1492 – 1526),
- 2) colonización y explotación (1526 – principios del siglo XIX),
- 3) emancipación y organización nacional y regional de los nuevos Estados (principios del siglo XIX – 1870), y
- 4) intento de construcción de la identidad nacional y regional (1870 – la actualidad).

Por otro lado, y al menos en el Río de la Plata, consideramos que la actividad traductora ha sido sostenida e incluso incrementada tanto en las etapas de conquista y colonización como de emancipación y búsqueda de identidad, sólo que han cambiado tanto las modalidades (de oral a escrita, de las lenguas americanas a de las lenguas europeas occidentales, etcétera), como el origen étnico de los traductores/intérpretes (de americanos a criollos), los objetivos primordiales de la traducción/interpretación (de conquistar y colonizar a emanciparse, a construir identidad emancipada, etcétera) y el decididor/iniciador del acto traductivo/interpretativo, tanto en su ejecución como en su omisión (el Estado español, la Iglesia, el Estado emancipado, los intelectuales dominantes del Estado emancipado, etcétera).

La legislación sobre interpretación/traducción, en cambio, ha vivido etapas de mayor y menor desarrollo en cuanto a la sanción y vigencia. A nuestro criterio se registran, en este sentido, dos momentos de producción: el de la colonización/explotación y el del intento de construcción de la identidad nacional y regional.

Se trata de “una periodización basada a grandes rasgos en la institucionalidad política” (Pagni, 2014a: 220). Como lo que aquí nos interesa es la norma, ciertamente este criterio es aplicable, aunque no sea el único. Si el eje del análisis fuera otro (la política editorial, la traducción científica, filosófica o periodística, entre otros tantos), seguramente resultarían más pertinentes otros criterios de periodización.

## El choque

Desde la llegada de Cristóbal Colón, en 1492, en España se registra el interés en la intervención de intérpretes en las vinculaciones interculturales con los pueblos americanos, por lo menos oficiales, paralelamente a la actividad de los representantes o delegados del Estado. Se dice que Colón mismo, en su primer viaje, e ignorando aún qué iría a encontrar, trajo de España a dos intérpretes, que poco y nada pudieron hacer en tales circunstancias. Y en ese mismo viaje, entendiendo ya que se trataba de nuevas tierras, nuevas comunidades y nuevas vinculaciones, el Almirante inauguró una política luego llevada a extremos también por tantos otros conquistadores, consistente en la captura de indígenas para que aprendieran la lengua europea durante el regreso o en la misma Europa y más adelante pudieran actuar como intérpretes:

Desde su primer viaje –y así lo seguirá haciendo en los tres siguientes- Colón se lleva a unos diez nativos con miras a que se enteren de la lengua y vida de España para servir a los reyes en futuros viajes. De regreso a La Española (hoy Haití y Santo Domingo), acompañaban a Colón dos intérpretes: Alonso de Cáceres y un muchacho de la isla de Guanahaní (Bahamas) bautizado con el nombre de Diego Colón (Madariaga, citado por Bastin, 2003: 196-197)<sup>7</sup>.

Sólo treinta y cuatro años más tarde, específicamente el 17 de noviembre de 1526, una Ordenanza<sup>8</sup> vendría a legalizar y a limitar al mismo tiempo ese mecanismo: ahora los españoles estaban habilitados a secuestrar en cada viaje a una o dos personas (y no más) para que luego pudieran fungir de intérpretes y “otras cosas necesarias en dichos viajes” (De Cadenas y Vicent, 1988: 230)<sup>9</sup>.

Comenzaba la historia de la regulación legal escrita para intérpretes y traductores en América. De hecho, en los años '20 de ese siglo XVI, década de sanción de la citada Ordenanza, finalizó la que podemos llamar primera etapa del vínculo entre España y América, caracterizada por el choque y la construcción de las relaciones de poder entre Europa y nuestro continente, en la que la interpretación de lenguas tuvo su protagonismo, con ausencia del Estado como entidad reguladora en este campo.

Una ausencia que puede leerse como condescendiente y en apoyo a la iniciativa privada y personal de los navegantes-colonizadores (Dougna Rodríguez, 1994), debido a una situación institucional débil por las circunstancias históricas, políticas y económicas inmediatas, pero también como resultado de una inestable política lingüística en general, en principio porque

[...] a principios del siglo XVI, el castellano era una lengua confinada a una región del centro de España, que aún no se había independizado del latín. Competía entonces con varias otras vernáculos [...] y todavía compartía territorio con el sefardí y el árabe [...] (Cifuentes, citado por Payàs Puigarnau, 2010: 31).

Política lingüística errática e incipiente constitución del Estado habrían sido entonces las causas de esa ausencia. Los intérpretes que conocemos de este período (Diego Colón,

<sup>7</sup> Colón dio inicio a al menos dos costumbres españolas: la de secuestrar a aborígenes para servir a los fines españoles y la de bautizarlos y darles nombres católicos.

<sup>8</sup> La Ordenanza un documento que contenía “una reglamentación más o menos amplia de determinada materia”. La Real Cédula -que veremos más adelante- era un despacho ordinario para todos los asuntos de gobierno, de formulación simple aunque siempre firmada por el rey. Por último, la Real Orden -que también veremos más adelante- era una disposición del rey comunicada a través de los ministros de su gabinete (Tau Anzoátegui, Martíre; 1980: 94).

<sup>9</sup> Las Leyes Nuevas de 1542, capítulos 20 a 24, llevaron ese límite a cuatro (Dougna Rodríguez, 1994, cap. 3)

Julianillo, Melchorejo, Malinche, Gerónimo de Aguilar, Orteguita, Enrique de Malaca, entre tantos otros) tienen un final en general prematuro, incierto, violento y anónimo.

Cuando el Estado español se consolidó después, algunas cuestiones cambiaron, entre ellas, la normativa en torno a los intérpretes/traductores.

### La colonización

Decíamos que los años veinte del mil quinientos marcan un cambio de tendencia y el inicio de la segunda etapa, la de la conquista, colonización, organización, dominio, control y explotación del territorio, sus recursos naturales y humanos, que en nuestro campo de interés podemos establecer con la duración de unos trescientos años, esto es, hasta principios del siglo XIX.

En esta segunda etapa es posible identificar, a su vez, dos períodos, uno inicial, hasta la segunda mitad del siglo XVII -de sistematización del poder en la Península y frente a los Estados europeos y de Oriente y de embrionaria formación de la moderna maquinaria propia del Estado de Derecho-, coincidente con la regulación de la actividad de intérpretes en las colonias y de traductores e intérpretes en la Península, y uno posterior, de inacción legislativa para traducciones e interpretaciones, traductores e intérpretes, desde la segunda mitad del siglo XVII hasta principios del siglo XIX.

No es casual entonces, durante el primer período señalado, la elaboración de un andamiaje legal que legitimara, permitiera y, en algunos pocos casos, intentara al menos en la letra limitar muchos de los excesos individuales de los protagonistas, también en un difícil equilibrio de relaciones con la Iglesia. Dejar constancia, reafirmar y acrecentar la dominación y la hegemonía, también mediante instrumentos simbólicos de impacto como el registro y la documentación, la imposición de rituales propios de la tradición europea, un concepto de escritura estrictamente europeo, serían los ejes sobre los cuales se fundaría la política en general y, coherentemente con ella, la “política de comunicación” –que nosotros preferimos llamar “de vinculación”- con los americanos y, en consecuencia, la normativa en torno a la interpretación/traducción.

Los religiosos que acompañaban a los conquistadores siempre denunciaron a la Corona el abuso y maltrato de los aborígenes de parte de los navegantes españoles, circunstancia que provocó la preocupación de aquella por la sanción de algunas normas novedosas para América (Leyes de Burgos de 1512<sup>10</sup>, Leyes Nuevas de 1542<sup>11</sup> y Ordenanzas de Alfaro de 1612<sup>12</sup>), ya que no era posible aplicar el derecho castellano (o europeo en general), siendo que se la consideraba el “Nuevo Mundo”.

Desde las Leyes de Burgos en adelante los principios sobre los cuales se apoyaría la maquinaria jurídica (y política) de España en América eran:

<sup>10</sup> Cfr.: Sánchez Domingo (2012),

<sup>11</sup> Cfr.: [http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/9\\_15.shtml](http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/9_15.shtml) (ú.f.c.: 22/11/15).

<sup>12</sup> Carmignani (2013).



- 1) que el Rey de España tenía justos títulos de dominio sobre el “Nuevo Mundo”,
- 2) que los aborígenes eran seres libres, aunque súbditos de la Corona,
- 3) hecho que la colocaba en la obligación de evangelizarlos, según la tradición medieval.

La Corona pronto advirtió que para evangelizar a los aborígenes era necesario un buen trato y cierta negociación.

Este panorama abrió el abanico de posibilidades sobre la lengua en la cual vehiculizar la evangelización, política que sufrió marchas y contramarchas. Desde 1516 hubo recomendaciones y ruegos para enseñar a los indígenas a leer y escribir en castellano. Una Ordenanza de 1536 promovió el uso y la enseñanza de las lenguas aborígenes. En 1550, “Carlos V, considerando que había terminado el período provisional [...] ordenó que todos los indios aprendieran el castellano” (Payàs Puigarnau, 35), decisión que refleja y confirma la tesis de varios autores según la cual los españoles tuvieron, al menos durante esta etapa, una visión idealizada de los americanos como “buenos salvajes”, dúctiles a la aculturación europea. En 1570 Felipe II declaraba el náhuatl como lengua oficial del área hoy mexicana, pero con Real Cédula de 1596 disponía la enseñanza del castellano a los indígenas de Buenos Aires. En 1688, un decreto de Carlos II obligaba a la enseñanza de la lengua castellana para que los indios pudieran quejarse “a los superiores por sí mismos sin valerse de los intérpretes, que cohechados truecan la traducción” (Mariaca Iturri; 1993:143). Hacia fines del siglo XVIII, otra Real Cédula, de Carlos III, declaraba ilegal el uso de las lenguas americanas (Bastin, 2003: 196).

Ninguna de todas estas iniciativas tuvo los resultados esperados, aunque la consecuencia fue la pérdida paulatina y casi completa de las más de mil lenguas americanas y, con ellas, el derrotero cultural magistralmente señalado e ilustrado por Mariaca Iturri (1993).

Bastin (2003: 200-201) sostiene por su parte que

[...] hasta el fin de la época colonial, hubo un desinterés oficial por las lenguas americanas (fuera del uso funcional) que se manifestó por la pérdida y destrucción de textos y traducciones de incalculable valor, así como de estudios lingüísticos llevados a cabo por los misioneros jesuitas, franciscanos y jerónimos, para mencionar sólo algunos.

Con todo, durante el reinado de Carlos I y V del Sacro Imperio Romano Germánico (1516-1556), se registran las primeras normas en relación con los intérpretes de la esfera española, las cuales sientan las bases fundamentales para su desenvolvimiento también en los siglos siguientes y hasta la actualidad.

Todas estas normas, junto a las siguientes aprobadas hasta 1630, integrarían más tarde la conocida *Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. Mandadas imprimir, y publicar por la Magestad Catolica del Rey don Carlos II nuestro Señor de España*, en 1681, compendio de las más de seis mil leyes impuestas a partir de 1512 para regular las nuevas posesiones en el mundo.



La publicación está dividida en cuatro tomos y nueve libros. El Libro II, Tomo I, Título 29 (folios 273 a 276), contiene la normativa sobre la actividad “De los Interpretes”<sup>13</sup>.

La primera de las normas que nos ocupan lleva por fecha el 24 de agosto de 1529 y, definiendo la posición de traductores e intérpretes dentro de la estructura administrativa como auxiliares de Gobernadores y autoridades judiciales, sentó las bases de su actuación en cuanto a la *ratione loci*:

Mandamos que ningún intérprete o lengua de los que andan por las provincias, ciudades y pueblos de los indios...

Y, en cierta medida, a la *ratione materiae*:

... que les ordenen los gobernadores y justicias...

Si bien los intérpretes de las lenguas americanas, con posterioridad, fueron formalmente reconocidos como oficiales de las Audiencias<sup>14</sup> (Ordenanza de 1630), su jerarquía siempre fue menor. Quizás el antecedente inmediato de este concepto de “auxiliar de Justicia (de menor jerarquía)” esté en la “Secretaría de Interpretación de Lenguas”, hoy “Oficina de Interpretación de Lenguas”<sup>15</sup>, creada en la península poco antes, en 1527, ante la que se inscribían traductores de lenguas europeas para conformar las listas oficiales<sup>16</sup>.

En América, en los casos de necesidad de interpretación o traducción de o hacia las lenguas europeas, “la Audiencia utilizaba a personas extranjeras que por su residencia entre los españoles dominaban o sabían ambos idiomas, o también a españoles que por sus viajes conocieran dos o más idiomas” y se aplicaban también en estos casos las Leyes de Indias, en principio instituidas sólo para las traducciones/interpretaciones con los aborígenes (Tsugimaru Tanoue y Rodolfo E. Witthaus, en: Witthaus et al.; 2000: 24). Este criterio, de utilizar a personas extranjeras o a viajeros, continúa vigente hasta la actualidad.

Los intérpretes no podían pedir ni recibir nada extra (“joyas, ropas, mantenimientos...”) de nadie, ni indígenas ni españoles, debiendo limitarse a percibir lo

<sup>13</sup> Cfr: <http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/752/571/recopilacion-de-leyes-de-los-reynos-de-las-indias/> (ú.f.c.: 16/01/13). Todas las citas y referencias al respecto citadas en el presente trabajo han sido tomadas de este documento.

<sup>14</sup> Institución judicial creada por la Corona española en 1369 para el territorio ibérico. A partir de 1511 también se aplicó en las colonias, adquiriendo las funciones mejor definidas para la época de todo el imperio, estatus reforzado además por su condición estable (Floria y García Belsunce, 1985) frente a la periodicidad de los virreyes. Era el máximo órgano de justicia en su jurisdicción y en América también tenía función consultiva en asuntos de gobierno y economía de virreyes y gobernadores e informante a la Corona en casos de extralimitación de éstos y de anomalías en el desempeño de los sacerdotes. Estaba obligada a velar por el buen trato a los aborígenes, era considerada representante de la persona del rey y estaba compuesta por un Presidente –por lo general, el mismo virrey o gobernador–, una cantidad variable de jueces llamados “oidores”, y otros funcionarios, entre ellos, el o los intérpretes (cfr. Ordenanza de 1630), en calidad de “auxiliares de Justicia”.

<sup>15</sup> Cfr. <http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/oportunidadesprofesionalesformacion/oportunidadesprofesionales/traduccioninterpretacion/paginas/inicio.aspx> (ú.f.c.: 01/01/15).

<sup>16</sup> La actividad de esta Secretaría, con algunas modificaciones, se ha mantenido hasta nuestros días (cfr. Cáceres Würsig; 2004).

establecido por las autoridades. Las sanciones previstas eran la pérdida de los propios bienes y el destierro.

Por entonces –y podría decirse que durante todo el período de la dominación española en América- no era obligatorio para los intérpretes conocer acabadamente el universo lingüístico-cultural de los indígenas, por el que el Estado tenía un manifiesto desinterés, mientras que era ineludible conocer muy bien el universo lingüístico-cultural europeo (Fossa; 1992: 3) y esto en virtud de una concepción eurocéntrica o, en el mejor de los casos, ingenua –y tan ingenua como peligrosa- basada en un conjunto de creencias:

- (I) el universo cultural y lingüístico de los pueblos americanos era primitivo, simple y rudimentario;
- (II) de este modo, ese universo podía ser conocido en su totalidad;
- (III) siendo los intérpretes indígenas, por su condición de tales, naturalmente conocían ese universo y en su totalidad;
- (IV) si los intérpretes eran europeos, el perfecto conocimiento del universo americano era fácilmente accesible, por la supuesta superioridad europea y por la supuesta simplicidad de la cultura americana;
- (V) la traducción/interpretación era un acto mecánico
- (VI) y cuando el acto mecánico no era posible, se imponían las ideas o los valores europeos.

La siguiente norma, del 12 de septiembre de 1537, intentó contrarrestar la desconfianza y el malestar de los indígenas frente a interpretaciones consideradas dudosas, permitiendo que éstos pudieran llevar a un “cristiano amigo suyo” –lo que hoy llamamos “perito de parte”- para cerciorarse de que sus dichos fuesen correctamente volcados en lengua castellana, una de las pocas cuestiones no reiteradas o modificadas con posterioridad.

En 1563, ya durante el reinado de Felipe II (1556-1598), sucesor de Carlos I, la Corona dictó nueve Ordenanzas, con sus respectivas sanciones en caso de incumplimiento, para regular el salario, la presencia/ausencia, el lugar de la prestación, el juramento, los requisitos morales y las cualidades profesionales, cuestiones en la mayoría de los casos confirmadas, repetidas o mejor detalladas con cada Ordenanza sucesiva. Luego de 1563, y durante unos 250 años, sólo dos leyes más serían dictadas para el conjunto de las posesiones de ultramar, siempre en relación con la actividad de los intérpretes, una del mismo Felipe II, en 1583, y la otra, de Felipe IV (1621-1665), en 1630.

Por lo general, la cuestión del salario es la primera enunciada en cada texto legal -mencionada también indirectamente como prohibición de pedir o recibir, de forma directa o indirecta, para sí o para otros, nada más que lo establecido, ni siquiera alimentos (Ordenanza nº 298), de ninguna de las partes implicadas en cada causa, ni “de nadie”. Además de pretender establecer una condición de imparcialidad para con los contendientes, en su reiteración, la norma también pondría en evidencia algún tipo de connivencia entre ciertos jueces o autoridades españolas e intérpretes, en el sentido de que los últimos habrían actuado

a favor de los primeros con una prestación parcial y a cambio de ciertos beneficios (Witthaus et al., 2000). Las Ordenanzas 297, 298, 300, 303 y 304 utilizaron prácticamente las mismas palabras para tal prohibición, aunque ninguna de ellas estableció relación alguna entre salario, complejidad y tiempo de la prestación. Recién la n° 305 previó por cada testigo una interpretación promedio de doce preguntas, en cuyo caso el intérprete debía cobrar un tomin<sup>17</sup>. Si el interrogatorio se extendía a más de doce preguntas, el salario debía ser de dos tomines, y en el caso de un interrogatorio extenso, las autoridades debían establecer la paga según la complejidad de la tarea desarrollada y el tiempo utilizado.

La Ordenanza del 10 de mayo de 1583 cambió la perspectiva estableciendo que el salario debía honrar a los intérpretes “como se merecen”.

La cuestión de la presencia, tanto por el número de intérpretes como por el lugar donde éstos debían desempeñar sus tareas, varió de criterio con el correr de los años y con el aumento de las actividades del Estado. La Ordenanza n° 297 sólo previó que hubiera “cantidad suficiente de intérpretes presentes en las Audiencias”. La n° 298 ordenó prestar el servicio solamente en la Audiencia. La n° 301, que se garantizara la presencia diaria, imponiendo las obligaciones de asistir a acuerdos, audiencias y visitas carcelarias todos los días hábiles y, por la tarde, estar con el Presidente y los jueces de la Audiencia, siempre organizándose los intérpretes la distribución de horarios entre sí para estar presentes en todo momento y no dilatar los tiempos de las causas ni perjudicar por este motivo a los involucrados. La n° 302 perfeccionó la cuestión y estableció que los intérpretes sólo podían ausentarse con licencia del Presidente de la Audiencia. La n° 304, por la necesidad de prestaciones fuera de la Audiencia y por mandato de la misma, estableció el pago de dos pesos en concepto de gastos del intérprete para su desempeño. La n° 306 fijó el horario -9 de la mañana- a partir del cual debía estar presente al menos un intérprete en los días de Audiencia, junto al escribano, para “tomar memoria y llamar a los testigos”.

En Witthaus (2000: 23-24) leemos además que la cantidad necesaria de intérpretes presentes cambió con el tiempo. En un primer momento hubo un solo intérprete. Más tarde, comprobados casos de fraude o perjuicio por su culpa, “se buscó la solución en la actuación simultánea de dos lenguaraces que concurriesen juntos a la declaración del indio, aunque señalándose que en los casos en que no se pudiese hallar más que un solo intérprete que expusiese los hechos, debía dársele entera fe y crédito”. Y, por último, comprobado también que ambos lenguaraces podían ponerse de acuerdo, “se estableció que los intérpretes no concurriesen juntos a la declaración del indio, sino que cada uno por su parte, e ignorando la traducción del otro (...)”.

Las cualidades profesionales y los requisitos morales, íntima y sustancialmente ligados al juramento, aparecieron ya con la primera de esta serie de Ordenanzas, la n° 297, la cual precisó, con palabras de extraordinaria actualidad, que el intérprete debía precisamente interpretar bien y fielmente, en forma clara, abierta, imparcial y completa. Todas condiciones

<sup>17</sup> *Tomín*: etimológicamente significa “la octava parte de algo” (Noejovich; 1996: 207). En el contexto que nos ocupa, se trata de un tipo de moneda utilizada por España en algunas partes de América durante un cierto período de tiempo.

que pueden ser entendidas de alcance universal, es decir, para la estructura judicial y también para todas las partes implicadas en el proceso, pero que en sustancia son de alcance, en la letra, institucional: el intérprete debía –y debe- interpretar para el juez de modo que éste considere que lo hace “bien y fielmente, de forma clara, abierta, imparcial y completa”.

Es de suponer que estas expectativas no se cumplían de la manera esperada y es por este motivo que las normas insistieron en varias cuestiones.

El objetivo de imparcialidad en el desempeño de las funciones fue buscado de diferentes maneras. En primer lugar, como ya vimos, mediante la regulación del salario y la consiguiente prohibición de pedir o recibir nada extra pero, además, con la prohibición -para los intérpretes- de ser procuradores o solicitadores en las causas de los nativos (Ordenanza n° 300) y de realizar cualquier tipo de acuerdo con los indígenas, también fuera de la Audiencia (Ordenanza n° 303).

Recién con la Ordenanza del 10 de mayo de 1583 España volvería sobre los aspectos morales y profesionales de los intérpretes, aunque esta vez cambiando la perspectiva y dejando entrever que se trataba de figuras de interés especial para el Estado: los intérpretes debían ser fieles, de comprobada buena conducta y cristianos –por primera vez se hacía mención expresa al credo religioso que debían profesar, favoreciendo quizás a los religiosos o a los aborígenes bajo su órbita-, “porque son el instrumento por donde se ha de hacer justicia”; debían desenvolverse con “calidad y suficiencia” -condiciones evaluadas y valoradas por los Presidentes y jueces de las Audiencias- y cualquier presunción de incumplimiento de la obligación de fidelidad debía ser debidamente investigada y, en el caso fuera comprobada, castigada “con todo el rigor” (Tanoue y Witthaus, en: Witthaus et al.; 2000: 22).

Casi un siglo más adelante, el 16 de octubre de 1630, España insistió en la necesidad de que los intérpretes fueran de “gran confianza y satisfacción”, debiendo ser elegidos mediante un examen, con el voto y la aprobación de todo el cabildo<sup>18</sup> o de la comunidad de los indígenas<sup>19</sup>, no pudiendo ser removidos sin justa causa y “se les tome residencia cuando la hubieren de dar los demás Oficiales de las Ciudades y Cabildos”, con lo cual también se reconocía formalmente su condición de “Oficiales” de Justicia. En esa misma disposición se estableció también la condición de que los intérpretes tuvieran un adecuado conocimiento

<sup>18</sup> Órgano de gobierno de la ciudad, con funciones judiciales, administrativas, económicas y militares en su jurisdicción, con cierta autonomía, ámbito de acción política para los criollos (Floria y García Belsunce, 1985: 114).

<sup>19</sup> Principio similar sobre el que actualmente se fundamentan, entre otros: el Art. 75 de la Constitución Nacional Argentina ([...] Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten [...]), el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley n° 24071 (Art. 6: 1. [...] los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados [...] cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; [...]). Cfr.: <http://www.sdh.gba.gov.ar/comunicacion/normativainternacional/pueblosoriginarios/convenio169.pdf>, ú.f.c.: 17/07/15) y la Declaración Universal de los Derechos sobre los Pueblos Indígenas de la ONU (Art. 32: 2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, [...]). Cfr.: [http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS\\_es.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf) (ú.f.c.: 17/07/15).

de la lengua, sin el cual “resultan muchos inconvenientes” consiguientes a los errores encuadrables en lo que hoy conocemos como falsedad ideológica.

El conocimiento de la lengua, así como el concepto de “conocimiento” en toda Europa en general era muy diferente al actual: no existían sistematización, progresión, institucionalidad, acreditación ni habilitación tal como las conocemos hoy, por lo cual es posible suponer que ese “conocimiento” al que hace referencia la Orden de la Corona española tenía que ver más bien con un manejo propio del entonces universo cultural español y europeo, antes que con las lenguas americanas. Incluso hasta los albores del siglo XIX, en España regía el sistema universitario creado siglos antes (Tau Anzoátegui y Martiré; 1980: 275, 334-335)<sup>20</sup>.

Las sanciones por errores cometidos por los intérpretes fueron variando aunque, por lo general, se establecieron según el criterio económico y otras pocas veces, por la pérdida del oficio, temporal o permanente. Las Ordenanzas 297, 298 y 300 previeron la devolución de lo cobrado más las setenas, es decir, siete veces el daño causado. La 297, además, la pérdida del oficio. La n° 298 y la n° 300, también, tres pesos la primera vez, el doble de la pena la segunda y la tercera, el doble de la pena y la pérdida del oficio. La n° 301, el pago de dos pesos por cada día de ausencia y el pago de los daños, intereses y costas a la parte o a las partes eventualmente damnificadas por la postergación de los tiempos en el tratamiento de las cuestiones. La n° 302, la pérdida del salario por el tiempo de ausencia más el pago de doce pesos. La n° 303, la devolución de lo obtenido por esa vía más las setenas y la pérdida, esta vez perpetua, del oficio. La n° 304, el pago de las setenas. La n° 305, la devolución del cuádruple de lo cobrado. La n° 306, el pago de medio peso por cada día de ausencia.

Política lingüística errática para América y consolidación del Estado habrían sido entonces condiciones favorables a una legislación fuerte aunque reiterativa. Los intérpretes que conocemos de este período (Felipe o Felipillo, Francisco del Puerto, Martinillo de Poechos, Estevancio, entre tantos otros) conviven e incluso se alían a los aborígenes, comienzan a “administrar el sentido”, se ponen “al servicio del enemigo”, se independizan y actúan “por cuenta propia” (Payàs & Garbarini, 2012).

Desde la Recopilación de 1680 y hasta mediados del siglo XIX no hubo entonces, según las fuentes y los autores consultados, ninguna nueva norma sobre la traducción, la interpretación, los traductores o los intérpretes de América, por lo que es dable suponer que

---

<sup>20</sup> Una suerte de abordaje global y milenario del conocimiento en su conjunto, que dividía toda la educación en tres etapas: (I) primeras letras, (II) latín y filosofía y (III) estudios propiamente universitarios, entre los cuales no figuraban las lenguas extranjeras –sólo el latín, como lengua franca de transmisión y del pensamiento- tanto menos las americanas originarias, que sólo se enseñaban en algunas Universidades americanas. Al mismo tiempo, “Los maestros eran improvisados y conocían apenas aquello que debían enseñar, pero las exigencias eran mayores en cuanto a la edad, conducta, condiciones morales y ‘limpieza de sangre’ (Tau Anzoátegui y Martiré; 1980: 263-264). Por último, conviene apuntar que la lingüística comparada nació de la mano del romanticismo recién a comienzos del siglo XIX, de modo que la sistematización de la comparación de las lenguas era impensable en el período tratado.

las normas sancionadas durante los dos primeros siglos de dominación fueron consideradas suficientes. Paralelamente, a fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, en la Península se aprobaron algunas normas nuevas, aunque sólo para las traducciones con los demás países europeos, que *grosso modo* reiteraron varios de los principios y definiciones citados, como la fidelidad al texto fuente y la traducción completa (cfr. Reales Órdenes de los años 1783, 1841, 1843, 1853, 1872 y 1896 - Peñarroja Fa, 2004). También se registran normas para la regulación de la actividad en un primer convenio firmado con Francia, en 1862, que replicó la cuestión de la traducción en los convenios firmado por España en lo sucesivo con otros países europeos, desde 1867 con Italia hasta 1911 con Japón, y un Reglamento de la carrera de Intérpretes de 1870 (Peñarroja Fa; 2004).

Consolidación del castellano como lengua oficial de un Estado y un imperio también consolidados es el marco de la inacción en la inventiva normativa sobre intérpretes/traductores. Son muy pocos los intérpretes que conocemos de este período, Ays –o Antonio–, malbalá oriundo del Gran Chaco Gualamba argentino quien, como tantos otros malbalás, fue enviado a Buenos Aires (Lozano, 1733), es uno de ellos.

A mediados del siglo XIX, con Real Orden del 16 de junio de 1839, emanada solamente para Cuba –única colonia española en el continente americano por entonces<sup>21</sup>–, se institucionalizó la figura del “intérprete público”, quien debía traducir al castellano “con la más severa escrupulosidad, sin permitirse la menor licencia, sino la que demande estrictamente la fraseología de los idiomas, inclinándose en todo lo posible a la traducción literal, y nunca a la libre; (...) con toda claridad, y sin dar lugar a dudas, el verdadero sentido del original”. La sanción prevista en caso de incumplimiento era el pago de gastos judiciales y perjuicios (Peñarroja Fa; 2004).

Estos intérpretes ya no lo eran de lenguas americanas, sino de francés, inglés, italiano y portugués (Art. 17), hecho que evidencia varias cuestiones, entre ellas, fundamentalmente, la alineación de la “política de vinculación intercultural” en América con la política europea y la cada vez mayor marginalidad de las lenguas aborígenes u originarias.

La misma Real Orden de 1839, y tal como había sido dispuesto trescientos años antes para todas las colonias con la Ordenanza de 1537, establecía que cada parte en litigio podía hacer intervenir al perito de su confianza, aunque ahora se establecía una diferencia sustancial, puesto que antes, la presencia de un segundo intérprete intentaba contrarrestar la inseguridad sentida por el indígena, mientras que ahora el Estado buscaba garantizar su verdad mediante la intervención del “intérprete público” (Peñarroja Fa; 2004):

En los asuntos entre partes, éstas pueden hacer intervenir en las interpretaciones que les convengan, al perito que elijan, pero siempre acompañado del público, que es el que tiene la confianza de la autoridad. En

<sup>21</sup> Cuba se independizaría de España recién en 1895.



caso de discordia la dirimirá el otro intérprete en La Habana u otro perito nombrado por el Juez (Art. 11).

En las causas criminales se consagraba “el juramento [...] de que (el intérprete) hará las interpretaciones con la más escrupulosa fidelidad”, mientras que “En todos los asuntos de oficio [...] los intérpretes públicos [...] deberán asistir con exactitud a su llamada, evacuando con toda fidelidad el encargo que se les confíe, previo el correspondiente juramento, cuando se creyere necesario” (Art. 10).

El 07 de junio de 1845, no ya la Corona española sino el Gobierno Superior Civil de Filipinas, la otra colonia española en el mundo además de la cubana<sup>22</sup>, dictó una norma con la que, entre otras cosas, prohibió para toda autoridad aceptar “escrito en lengua del país, que no esté traducido por traductor autorizado” (Art. 4), quien hará “la traducción del escrito bajo su firma y con la responsabilidad de la fiel traducción, no del contenido” (Art. 3) (Peñarroja Fa; 2004), más o menos en consonancia con las normas aprobadas en la Península.

Aunque no fueron aplicadas al actual territorio argentino, hacemos referencia a estas normas de Cuba y Filipinas porque ciertamente eran moneda corriente tanto la difusión de sus concepciones elaboradas en ámbito europeo, como la copia en América de políticas y normas jurídicas estadounidenses y europeas en general y peninsulares en especial, más allá de la relación más o menos conflictiva imperante después de la independencia de cada una de las colonias de España. La concepción jurídica y de organización política siguió prácticamente el mismo camino marcado por las ideas de progreso y confianza en la razón dominantes en la época, en Europa y Estados Unidos.

Consolidación del castellano como lengua oficial de un Estado y un imperio también consolidados es el marco de la inacción en la inventiva normativa sobre intérpretes/traductores. Son muy pocos los intérpretes que conocemos de este período. Ays –o Antonio-, malbalá oriundo del Gran Chaco Gualamba argentino quien, como tantos otros, fue enviado a Buenos Aires (Lozano, 1733), es uno de ellos.

## La emancipación

En la primera mitad del siglo XIX se dio la que podemos llamar la tercera etapa en el vínculo entre España y América, caracterizada por la emancipación de prácticamente todas las colonias españolas en el mundo y los intentos de organización nacional y regional de los nuevos países o construcción jurídica y política de los nuevos Estados, aunque estas acciones estuvieron orientadas, como decíamos arriba, por ideas, concepciones, normativa y hasta aspectos culturales del mismo continente europeo, atacando o descuidando –en el mejor de los casos- la relación de europeos y descendientes de europeos radicados en América con los aborígenes o “Pueblos Originarios”.

<sup>22</sup> Filipinas se independizaría de España en 1898.



De hecho, en los últimos doscientos años, y en nuestro ámbito de la traducción y la interpretación, la política de vinculación del Estado argentino con los Pueblos Originarios ha sido radicalmente diferente a la instaurada entre el Estado español y los aborígenes americanos durante la colonia.

Ciertamente esta etapa (de principios del s. XIX hasta 1870 aproximadamente), de breve duración en el actual territorio argentino si la consideramos dentro de todo este relato, vivió una intensa actividad traductora, llevada adelante por intelectuales y políticos interesados en traer las nuevas ideas europeas y estadounidenses, con base en la filosofía racionalista en boga por entonces y en el nuevo significado dado a la sociedad, el Estado y la Iglesia por pensadores tales como Hobbes, Locke, Montesquieu y Rousseau, entre otros, prácticamente todos autores franceses, ingleses y norteamericanos.

Sin lugar a dudas, la interpretación castellano-lenguas aborígenes siguió su curso, especialmente en un primer momento, como lo demuestran estudios históricos y muchas obras literarias de la época que refieren situaciones de distinto tenor con lenguaraces y lenguarazas de lenguas aborígenes (Ratto, 2005), pero el mundo de la traducción en su conjunto fue desplazando paulatinamente los ejes sobre los que se había construido en los siglos anteriores y adquiriendo una novedosa dimensión:

[...] en toda América hispana, si exceptuamos el caso del Paraguay, donde el guaraní se considera lengua oficial, se impuso el español, con la consiguiente desaparición de cientos de lenguas autóctonas, y ni los movimientos independentistas ni los gobiernos que se instauraron después de la independencia de España se propusieron seriamente revertir la situación (Payàs Puigarnau, 2010: 60).

Un ejemplo cabal de tal proceso de desplazamiento paulatino pero decidido es el caso de José de San Martín (1778-1850), quien tradujo del francés y del inglés, pero también utilizó, a lo largo de sus campañas de liberación, a intérpretes de quechua, guaraní y aimara para difundir los nuevos ideales independentistas también entre los indígenas y atraerlos a la nueva política (Tanoue y Witthaus, en: Witthaus et al.; 2000: 25).

Una de las más importantes preocupaciones de los primeros gobiernos rioplatenses fue la publicidad de los actos de gobierno y la difusión de las nuevas ideas e instituciones del país independizado. Así, las principales leyes dictadas por la Asamblea del Año 13 y el Acta de Independencia de 1816 fueron traducidas a algunas lenguas aborígenes para que pudieran ser conocidas por la mayor cantidad posible de indígenas locales, pero muy probablemente con la primera intención de obtener su adhesión (Tanoue y Witthaus, en: Witthaus et al.; 2000: 25).

Otros de los primeros impulsores de la independencia también realizaron varias traducciones y eran conocidos por esta labor, pero por las traducciones de las lenguas europeas al castellano. A partir de 1810, por ejemplo, Mariano Moreno (1778-1811) incorporó su versión del Contrato Social de Rousseau a las escuelas de Buenos Aires.

Traducían del francés Juan Martín de Pueyrredón (1770-1850), militar y político que ocupó el máximo cargo a nivel ejecutivo de la Argentina recién independizada, y el Capitán Carlos Forest (1787-1823), militar de origen francés. Manuel Belgrano (1770-1820), que conocía el italiano, el latín, el inglés y el francés, traducía del inglés y del francés (Elissalde, 2012). Pero estos avenidos “traductores” trabajaban con géneros textuales muy distintos a los de las etapas anteriores y claramente con otros objetivos, entre los que no es posible descartar el de inaugurar un capítulo de traducción local de clásicos europeos para adelantarse o competir con las traducciones de los mismos textos realizadas en la península o para impulsar el desarrollo de una cultura local, en el mejor sentido del Romanticismo en pleno auge en la época.

Bastin llama “apropiación” la ideología de traducir lo europeo con la clara intención de expresar la propia posición política y cita, entre varios autores, a Briceño Guerrero, para quien

en las actitudes emocionales y en la acción política latinoamericanas siempre están presentes [...]: 1) el discurso europeo segundo [...] que engloba las ideas del racionalismo, la ilustración y la utopía social; 2) el discurso hispánico o mantuano, que ha gobernado la conducta individual, las relaciones familiares y los sentidos de dignidad, honor y felicidad del hombre latinoamericano; y 3) el discurso salvaje, que se manifiesta en las más íntimas emociones y relativiza a los otros dos a través del sentido del humor, la embriaguez y un secreto rechazo por todo (Bastin, 2004: 90).

Esto es, si bien la vocación en construir una identidad nacional o una nación existe desde principios del siglo XIX, los intelectuales dominantes<sup>23</sup> casi siempre han partido de textos e ideas europeas y han traducido según estrategias y concepciones políticas y filosóficas también europeas, especialmente las nacidas de la mano de la revolución francesa y de los nacionalismos románticos. Las traducciones estimularon el pensamiento local y la elaboración de ideas propias, aunque en última instancia, tanto los asuntos de interés como las estrategias de traducción reproducían modelos europeizantes y norteamericanizantes.

Al mismo tiempo, en sintonía con las nuevas ideas del viejo continente, el Estado debía tener una única lengua, concebida como lengua de la nación, haciendo coincidir, prácticamente sin ningún fundamento, nacionalidad y ciudadanía y excluyendo todo aquello que no fuera coherente con dicha coincidencia. Las lenguas aborígenes no formaban parte de la ciudadanía.

Las lenguas extranjeras y la traducción de y a las lenguas extranjeras (europeas y mayoritarias) eran concebidas como instrumentos para las relaciones con ciudadanos de otros países, o para las relaciones entre los distintos Estados, o como instrumentos a los fines

<sup>23</sup> Respecto de la relación entre consolidación de una lengua oficial, una producción lingüística local y nacionalismo, cfr. Pagni (2014b).

de un mejor posicionamiento de cierta cultura de élite o, por último, como instrumento para la construcción de una identidad propia, si bien este objetivo aún estaba por ser definido.

En el decir de Roberto Bein (2005: 27), para los intelectuales occidentales en su conjunto, “...sobre todo durante los siglos XVIII y XIX, en los salones literarios y otros cenáculos intelectuales la práctica de la traducción solía acompañar la composición, la lectura y el comentario de obras propias y ajenas como un ejercicio de estilo, una diversión y a veces un alarde de maestría y dominio.”

Mientras que, hasta donde es posible rastrear, los intelectuales avenidos traductores no estaban inscriptos como traductores o intérpretes, siempre en estos primeros años de independencia política, traductores e intérpretes de lenguas europeas, de oficio, autorizados y nombrados oficialmente para actuar como tales, más bien orientados al mundo comercial y burocrático, ofrecían sus servicios como profesionales independientes en los periódicos de la Buenos Aires de entonces (“Semanario de Agricultura, Industria y Comercio”, 1802 a 1807, “El Argos de Buenos Aires”, 1821 a 1825 y la “Gazeta de Buenos Ayres”, 1810 a 1821, que también se llamó “Gazeta Ministerial”, entre 1812 y 1815, “Gazeta de Gobierno”, entre 1815 y 1815, y “Gazeta de Buenos-Ayres”, entre 1815 y 1821), entre ellos: Joseph Cirilo Conde, Juan Richmond, José Antonio Castellón (Tanoue y Witthaus, en: Witthaus et al.; 2000: 24). Todos tenían autorización y nombramiento otorgados por el Estado y ejercían la profesión como profesión liberal, sobre la base de la buena fe y la honestidad, circunstancias que demuestran al menos un cierto interés en el mantenimiento de la legislación anterior a la independencia en cuanto a los requisitos morales y profesionales de la actividad, pero ahora enfocada a regular las vinculaciones y el comercio con países europeos. De hecho, no se registra la aprobación de nuevas normas en nuestro campo y habrá que esperar unos sesenta años más luego de la emancipación para que el Estado –esta vez argentino- volviera a expresar algún interés legal en intérpretes y traductores, en la traducción y la interpretación.

Al igual que en los primeros tiempos del Estado español en América, en sus orígenes el Estado argentino estuvo más o menos ausente, copio la herencia europea y dejó hacer a los privados. Los intérpretes de este periodo son criollos que han vivido como prisioneros o cautivos entre los aborígenes y luego han sido “rescatados”: Santiago Avendaño (1834-1874), luego de haber permanecido cautivo siete años entre los ranqueles, en 1852 obtuvo el diploma de “Interprete de la provincia” de Buenos Aires para participar en las campañas entre el gobierno y los ranqueles (Hux 1999: Prologo). Eugenio del Busto (1811-1899), luego de permanecer “prisionero” entre los mapuches, fue rescatado en 1825 e hizo carrera militar, siendo enviado a luchar contra los indígenas del sur, por orden de Rivadavia, Rosas, Roca y Mitre.

De los intérpretes aborígenes, en cambio, solo quienes demostraron cabalmente costumbres y espíritu europeizantes gozaron de alguna estima:

Ese mismo espacio social era ocupado por indígenas mejor identificados como tales por su origen, pero adaptados en mayor o menor medida a usos criollos, incluso hablantes de castellano como la china Carmen [...]. Carmen compartía

con su hermana, la mujer de Villarreal, “una china magnífica”, vestida con lujo y conocedora de Buenos Aires, esa condición de mediadora entre culturas; como también “el indio Manuel López, educado en Córdoba, que sabe leer y escribir” y era compadre de Mansilla (Nacach & Navarro Floria; 2004: 247).

### Intento de construcción de la identidad nacional

A la etapa de emancipación siguió la que podemos identificar como cuarta, caracterizada por la construcción –o los intentos de construcción- de la identidad nacional y regional, cuya duración puede extenderse hasta nuestros días o, teniendo como enfoque el asunto de la regulación legal de la traducción, hasta los años setenta y ochenta del siglo XX.

Durante este largo período son dos los ejes en torno a los cuales giran la política y las normas regulatorias de la traducción, entendida ésta como traducción español-lenguas europeas y viceversa, área en la que ya se encuentra completamente subsumida la interpretación.

Por una parte, el desarrollo académico e institucional de la carrera o profesionalización del traductor –que se define por la formación institucional de Traductores Públicos de las lenguas europeas más prestigiosas, no de intérpretes- y, por la otra, la sanción de leyes y Códigos nacionales, que se define por la regulación de la traducción –que incluye la interpretación, entendida ésta como una modalidad de la primera- en ámbito judicial y administrativo.

En efecto, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el status de los aborígenes y los intereses del Estado habían cambiado notablemente. Los primeros eran considerados cada vez más marginales en función de una política local que vería su apogeo pocos años después, hacia fines de ese siglo y principios del siguiente, y que se prolongaría hasta nuestros días. El Estado, uniformado lingüísticamente bajo el idioma oficial castellano, miraba ahora decididamente hacia Europa y Estados Unidos como modelo político de sociedad y de pensamiento, si bien desde una perspectiva de paridad –nunca correspondida, vale la pena aclararlo-, circunstancia que determinó toda una serie de iniciativas tendientes a alcanzar ese objetivo de inserción en el círculo de naciones poderosas y prestigiosas. Y las lenguas aborígenes y la interpretación/traducción español-lenguas aborígenes dejaron de ser una preocupación y de tener importancia, para ser suplantadas por las lenguas europeas y la traducción español-lenguas europeas, que también comenzaron a ser parte intrínseca de una política cultural exitosa, en el sentido de que pasaron a ser sustanciales en la cultura en general.

Un claro ejemplo de ello es la creación, durante el gobierno de Sarmiento, en 1870, de las escuelas normales argentinas, con la importación de maestros norteamericanos, hecho que implicó una gran cantidad de traducciones de obras pedagógicas inglés > español y el trasplante al sistema educativo y cultural argentino de concepciones y valores propios del sistema educativo norteamericano. El mismo Juan Bautista Alberdi (1810-1884), en sus “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, obra

publicada en 1852, había anticipado esta situación: “La instrucción para ser fecunda ha de contraerse a ciencias y artes de aplicación, a cosas prácticas, a lenguas vivas, (...)” (Tau Anzoátegui y Martiré; 1980: 755), donde “lenguas vivas” refería –y refiere en general también en nuestros días– al conjunto de las lenguas de Europa, especialmente occidental.

### Profesionalización del Traductor en el Río de la Plata

Con los antecedentes de los traductores de ámbito comercial y burocrático de los que ya tenemos noticia a partir de principios del siglo XIX, y del diploma de “Interprete de la Provincia” de Santiago Avendaño, de 1852, en 1868 un Decreto del Presidente Alsina daba origen a la carrera de Traductor en Buenos Aires y establecía, primero, que las traducciones juramentadas hacían fe en juicio, es decir, eran válidas por sí mismas; segundo, que para obtener la habilitación profesional era necesario aprobar un examen ante un tribunal formado por profesores de lengua y el Rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA)<sup>24</sup> y acreditar ante la Justicia la misma información sobre buena conducta que notarios y procuradores. Por último, para ejercer efectivamente la profesión, el Gobierno debía otorgar la correspondiente autorización, detentando así el derecho *in fine* de aceptar o rechazar el título a partir de la información producida en el expediente de cada candidato. Este requisito se condice con los principios que desde los tiempos de la independencia se habían consolidado como condiciones para ejercer la función pública, órbita en la que siempre se había concebido la actividad del intérprete/traductor.

Abandonada la política de captura de aborígenes, todas las universidades latinoamericanas (México, Lima, Santa Fe de Bogotá, Charcas, Guatemala, Cuzco, Caracas, Santiago de Chile, La Habana, Quito) habían sido las encargadas de formar a traductores e intérpretes incluso de las lenguas aborígenes al castellano y viceversa, con la cátedra de “lengua general” (Tanoue y Witthaus, en: Witthaus et al.; 2000: 20-21), por lo que la atribución a la UBA de evaluar y otorgar el título de Traductor en Buenos Aires no fue nada novedoso, aunque esta Casa de Estudios no ofreció el estudio de las lenguas aborígenes sino del latín y las lenguas europeas, como en las universidades europeas (Tau Anzoátegui-Martiré; 1980: 545). La iniciativa fue copiada más tarde por la Universidad de Córdoba (UNC)<sup>25</sup>, que en 1920 creó el Departamento o Instituto de Idiomas, dependiente de la Facultad de Derecho

<sup>24</sup> La UBA había sido creada por un edicto del 9 de agosto de 1821 del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, don Martín Rodríguez (Cfr.: <http://www.fi.uba.ar/institucional/index.php?m=135>, ú.f.c.: 14/09/12), muy a destiempo con respecto a la hoy Universidad Nacional de Córdoba y a las demás instituciones educativas y universidades de la América hispana, de las cuales las primeras habían sido el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, de 1536, y la Universidad de Santo Domingo, de 1538.

<sup>25</sup> La UNC, primera universidad argentina y segunda de América, había sido creada en 1622 por Real Cédula de Felipe IV. Con ella “comenzó la historia de la educación superior en la República Argentina” (cfr.: <http://www.unc.edu.ar/institucional/historia/origenes>, ú.f.c.: 14/09/12).

y Ciencias Sociales, en el que se estudiaban, como en la UBA, lenguas europeas y latín jurídico<sup>26</sup>.

Según Tanoue y Witthaus (Witthaus et al.; 2000: 25), luego de cursar cuatro años en la UBA, el primero en obtener el título de “Traductor Público” en latín e inglés fue Martín Sarratea, en ese mismo año de 1868 del Decreto de Alsina. Otro tanto ocurría poco después, cuando el tribunal presidido por Juan María Gutiérrez, entonces Rector de la Universidad, aprobó los exámenes finales de Adolfo Rawson (1848-1884) y Carlos Pellegrini (1846-1906), en inglés y francés respectivamente, a los que siguieron otros tantos más<sup>27</sup>.

En 1885, siempre en Buenos Aires, se abrió una matrícula de traductores para actuar en los Tribunales, ante los cuales, a partir de 1897, todos los inscriptos estaban obligados a jurar por el buen desempeño de la profesión. Los requisitos para el ejercicio eran: tener el título correspondiente, ser mayor de edad, producir información judicial sobre buena conducta y tener al menos un año de residencia.

A mediados de la década de los años veinte del siglo pasado se tomó una importante decisión con respecto a la formación académica de traductores. En la UBA, donde ya existían las carreras, se reformularon los Planes de Estudios exigiéndose el buen manejo de la traducción directa e inversa –es decir, al castellano y a la lengua extranjera respectivamente-, así como un vasto conocimiento del Derecho, dándose gran importancia al conocimiento de la lengua española, con lo cual se definían los criterios aún hoy vigentes en la formación académica de traductores (públicos) en esa Universidad. Para ejercer la profesión, además de cumplimentar estos estudios, se requería ser mayor de edad, acreditar buena conducta con información policial y tener al menos dos años de residencia. Con la explicitación del requisito de conocer profundamente la lengua española, y en apoyo a lo que venimos sosteniendo, cabe argüir que, además de la exigencia, una y otra vez reiterada en los Códigos nacionales, de la traducción al castellano de todos los documentos judiciales y administrativos, desde la emancipación se habría dado por descontado el conocimiento del idioma oficializado que, por espontáneo, se consideraba completo y suficiente. La explicitación de la UBA, en cambio, hace evidente la necesidad de un estudio sistematizado en ámbito universitario del español para traductores/intérpretes, aun siendo lengua materna.

Desde entonces y hasta fines de los años sesenta, salvo las marchas y contramarchas de la carrera en Buenos Aires señaladas en Witthaus et al. (2000), no se produjeron cambios significativos.

Hacia mediados de la década de los noventa, según los datos entonces disponibles, en Argentina existían treinta y ocho carreras de Traducción, tres de interpretación, tres

<sup>26</sup> En 1943 el Instituto se amplió, primero en “Escuela Superior de Lenguas” y, poco después, en “Escuela Superior de Lenguas Clásicas y Modernas”. Finalmente, en 2000, la Escuela devino en “Facultad de Lenguas” (cfr.: <http://www.lenguas.unc.edu.ar/institucional/historia.html>, ú.f.c.: 14/09/12).

<sup>27</sup> Recién en 1968, luego de un largo período de reacomodamientos institucionales y sociales de distinto tenor, la carrera adquirió sus características actuales, luego seguidas por Uruguay, México y Cuba (Bastin; 2003: 12).



carreras que denominamos “especiales”, por no proveer la fuente (Lázara, 1995)<sup>28</sup> indicaciones sobre el área específica de aplicación, y noventa y cuatro Profesorados y Licenciaturas en lenguas extranjeras. De todas ellas, la mayoría correspondía al idioma inglés y un buen porcentaje de las instituciones en las que se dictaban dichas carreras estaba ubicado en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, sobre todo las de traducción e interpretación (Piemonti y Pignatta, 1996)<sup>29</sup>.

### El traductor y el intérprete en los textos legales nacionales

Tanto por dar un ejemplo de esta situación, Tau Anzoátegui y Martiré (1980; 675) refieren que el primer Código Civil argentino, elaborado por Dalmacio Vélez Sarsfield, con entrada en vigencia a partir de enero de 1871 y hasta julio de 2015, tomó como sus fuentes fundamentales: el Código Civil francés, las doctrinas francesa y anglosajona, las reflexiones de los romanistas y los antiguos comentadores españoles, y fundamentalmente, la legislación castellana entonces vigente así como las modificaciones introducidas por las prácticas judiciales locales y las leyes sancionadas a partir del proceso de emancipación de España, desde 1810 en adelante, que ideológicamente seguían las líneas jurídicas europeas. Vélez Sarsfield también se basó en el Código Civil chileno, el *Esboço* del brasileño Augusto Texeira de Freitas y los proyectos de Acevedo para Uruguay, los cuales también seguían las líneas jurídicas europeas.

La sanción y entrada en vigencia de los Códigos Civil (de 1871)<sup>30</sup>, Comercial (de 1862)<sup>31</sup>, Procesal Civil y Comercial de la Nación (de 1967)<sup>32</sup>, Penal (de 1921), Procesal Penal de la Nación (de 1991), de algunas Leyes, como la de Estado Civil y Capacidad de las Personas n° 26.413 (de 2008), sobre el nombre de las personas naturales n° 18.248/69<sup>33</sup> y algunos decretos, como el de Organización de la Justicia Nacional n° 1.285/58<sup>34</sup>, complementaron y siguieron el proceso iniciado siglos atrás y profundizaron algunas cuestiones propias de los nuevos tiempos. Todos estos cuerpos legales de carácter nacional,

<sup>28</sup> La publicación referida no era completa porque, por ejemplo, no constaba en la misma que en la ciudad de Rosario, desde 1994, se dictaba el Interpretariado de Inglés en el Instituto Olga Cossettini. De todos modos, los datos marcan la tendencia de entonces, que es la que nos interesa señalar.

<sup>29</sup> Para demás detalles remitimos al excelente trabajo en curso de María Claudia Geraldine Chaia, del Centro de Estudios en Traducción “Bernabé Duggan” (CET), Facultad de Lenguas Universidad Nacional del Comahue, cuyos resultados están siendo publicados en la web (Cfr.: <http://cet.uncoma.edu.ar/>, ú.f.c.: 26/11/15).

<sup>30</sup> En Argentina, la primera regulación del procedimiento civil había sido la ley 50 de 1863; la primera ley nacional que regula el Registro Civil es la n° 1565, de 1884, aunque el primer Registro Civil fue municipal, en 1873, en la ciudad entrerriana de Colón.

<sup>31</sup> Cfr.: <http://www.pelaez.com.ar/pelaez/power/Otros/CodigodeComercio/CodigodeComercio.html> (ú.f.c.: 09/01/13).

<sup>32</sup> Cfr.: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16547/texact.htm> (ú.f.c.: 09/01/13).

<sup>33</sup> Cfr.: [http://www.sdh.gba.gov.ar/comunicacion/normativanacyprov/pueblosoriginarios/nacional/nac\\_ley18248.pdf](http://www.sdh.gba.gov.ar/comunicacion/normativanacyprov/pueblosoriginarios/nacional/nac_ley18248.pdf) (ú.f.c.: 01/02/13).

<sup>34</sup> Cfr.: [http://www.iberius.org/iberius-theme/docs/IB\\_LEGISLACION/000/0000/00000086/AR-Decreto-Ley1285\\_1.0.0.pdf](http://www.iberius.org/iberius-theme/docs/IB_LEGISLACION/000/0000/00000086/AR-Decreto-Ley1285_1.0.0.pdf) (ú.f.c.: 02/12/15). La primera ley orgánica de los tribunales nacionales fue la n° 27 de 1862.



tanto en sus versiones primeras como en las sucesivas, hasta llegar a los actuales textos vigentes, que no han modificado en sustancia ni en las palabras los contenidos que aquí nos interesan, contienen referencia expresa a la labor del Traductor o Intérprete, aunque no hacen lo mismo en cuanto a la naturaleza jurídica y características de la traducción o de la “traducción pública”, como bien observa Witthaus et al. (2000), ni de la “interpretación”. La misma afirmación puede hacerse del nuevo Código Civil, en vigencia desde el 1° de agosto de 2015, y del Proyecto de Nuevo Código Procesal Penal (proyecto que no ha llegado a aprobarse).

Además de estos cuerpos y de las leyes de colegiación de traductores –diez sancionadas hasta la fecha desde 1973–, existen otras normas derivadas de textos judiciales (sentencias, acordadas, etcétera), que aquí ni siquiera mencionamos porque no contradicen los principios establecidos por los Códigos y leyes nacionales. Para profundizar este aspecto remitimos al ya citado texto de Witthaus et al. (2000), en el que el autor realiza un análisis exhaustivo de las mismas hasta la fecha de publicación de su “Régimen legal...”. Por otra parte, tampoco nos detenemos en los textos de los Códigos Procesales de las distintas jurisdicciones porque, en general, en ellos se replican los conceptos y procedimientos ya expresados en los Códigos de la Nación, y un análisis más bien lingüístico en tal sentido, que es el que cabría en este caso, excede este espacio.

Los textos legales de alcance nacional son recurrentes y concordantes en aspectos tales como: la obligación de la traducción de todos los documentos escritos en lengua extranjera al castellano, llamado “idioma nacional”; la posición del traductor al interior de la estructura judicial y administrativa; el rito de la manifestación del compromiso, o juramento, de cumplir fielmente con el encargo; la obligación de estar presente según los requerimientos y los tiempos judiciales y administrativos; la regulación de honorarios; los requisitos personales –llamados “morales”– y profesionales necesarios para el desempeño, dentro de los que se incluye la responsabilidad fedataria, asociado al inherente concepto de falsedad.

Es decir, prácticamente todas cuestiones abordadas por la normativa española, ya desde las primeras Ordenanzas, que tienen que ver con la relación entre el traductor/interprete y el Estado, en sus esferas judicial y administrativa.

En cuanto a la retribución, llamada “salario” por la normativa española, “sueldo” por algunas normas nacionales argentinas –como el caso del citado Decreto Ley de Organización de la Justicia Nacional– para vínculos de dependencia laboral, u “honorarios”<sup>35</sup>, en caso de libre ejercicio de la profesión, queda clara, por una parte, la presunción de onerosidad de la prestación, cuya esencia se funda en los principios de habitualidad o continuidad (ejercicio de la profesión como un modo de sustentarse la vida) y la profesionalidad (conocimiento y responsabilidad). Con el principio de onerosidad se intenta asegurar, entonces, la habitualidad de la prestación, lo que redundará no sólo en la mejor calidad sino también en la asunción de

<sup>35</sup> Etimológicamente, *honorarios* refiere a la remuneración percibida por una obra de ingenio o idea de invención; *sueldo* refiere la remuneración percibida por quien ocupa algún cargo o tiene un empleo a servicio del Estado; y *salario* es un premio percibido por la ejecución de un trabajo simple (cfr.: <http://www.etimo.it/?term=onorario&find=Cerca, ú.f.c.: 20/01/13>).

responsabilidad profesional por parte del traductor, así como su imparcialidad, sus derechos intelectuales y profesionales. Al respecto, el antiguo Código Civil establecía:

Art. 1627: El que hiciere algún trabajo, o prestare algún servicio a otro, puede demandar el precio, aunque ningún precio se hubiese ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea de su profesión o modo de vivir. (...).

Las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales. Cuando el precio por los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio, los jueces deberán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida.

Y el nuevo Código Civil:

Art. 1251. Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución.

El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar.

En cuanto a la obligación de estar presente según los requerimientos y los tiempos legales y judiciales, el Art. 243 del Código Penal prevé la sanción a su incumplimiento:

Será reprimido [...], el que siendo legalmente citado como... intérprete, se abstuviere de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva.

En el caso del perito o intérprete, se impondrá, además, al reo, inhabilitación especial de un mes a un año<sup>36</sup>.

Con respecto a la traducción directa o inversa o la jerarquización del propio idioma, como hemos ya visto, en 1845 el Gobierno Superior Civil de Filipinas había dictado una

---

<sup>36</sup> En este punto tenemos otro ejemplo de coherencia entre los Códigos nacionales y provinciales. El citado Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, en el citado Art. 189, dispone que: “Los peritos ... Si dentro de los tres días de ser notificados, no aceptaren el cargo o lo rehusaren sin causa debidamente fundada, serán, de oficio, eliminados de la lista de nombramientos respectiva, no incluidos en la correspondiente al año siguiente. (...)”. Y para el caso en que, transcurrido el plazo y el o los peritos no hubieren presentado su dictamen o ampliación: “Art. 194: serán reemplazados. Además, excluidos de oficio, de la lista respectiva por el año en curso y el siguiente. (...)”.

norma que obligaba a la traducción a la lengua local de todo escrito redactado en otra lengua que fuera presentado ante autoridades u organismos del Estado, obligación que por otra parte ya existía en España (cfr. Cáceres Würsig; 2004). Si bien esta obligación no se halla expresa en la legislación de Indias, el principio se desprende de las mismas<sup>37</sup>. Este principio de traducir a la lengua local oficial todos los documentos escritos en lengua extranjera ventilados ante el Poder Judicial o ante la Administración Pública, con la obligación íntimamente relacionada al mismo principio de que dicha traducción sea realizada por un Traductor también local, se ha implantado en toda la normativa de alcance nacional argentina y su justificación estaría dada en dos necesidades y un vínculo con efectos legales.

En cuanto a las necesidades, la primera de ellas es que el profesional esté físicamente cerca del juez o del funcionario público para realizar cualquier aclaración o corrección pertinentes a la labor realizada si la Autoridad así lo requiriere. La segunda consiste en que el profesional realice su labor según las convenciones del sistema jurídico, el lenguaje y la terminología propios, para no propiciar dudas o ambigüedades con la utilización de figuras, lenguaje y/o terminología de otros contextos jurídicos. El vínculo con efectos legales consiste en que, de cometer un error, el profesional en cuestión es pasible de las sanciones previstas en el lugar donde actúa<sup>38</sup>.

En cuanto a las sanciones por mal desempeño o por incumplimiento de los deberes, en general, y según las últimas reformas, éstas se rigen según el criterio económico<sup>39</sup> y otras pocas veces, por la pérdida del oficio temporal, para el caso de ausencia o demora en el desempeño. También las leyes de colegiación prevén la sanción, a través de la actuación de los tribunales deontológicos al efecto constituidos.

### **El derecho sobre la traducción/interpretación**

En Argentina, la actual regulación del ejercicio de la traducción y de la interpretación como profesiones se apoya en un relato de fuerte y sostenida coherencia y continuidad histórica en lo atinente a la traducción/interpretación judicial y administrativa. Y tanto este relato como el ejercicio mismo de la traducción / interpretación y las figuras profesionales del Traductor y del Intérprete en su sentido integral se articulan, a su vez, con lineamientos políticos, culturales e ideológicos gestados en otras culturas y excepcionalmente propios.

La normativa española de la conquista y colonización en América, en lo atinente a la traducción y la interpretación, se nos ocurre muy moderna y actual si consideramos que sus definiciones y principios, establecidos hace quinientos años no sólo perviven a la fecha sino que se han desplegado en toda la normativa argentina. O, quizás, esa continuidad sea sólo el resultado de una copia sin mayores reflexiones que ha trascendido una independencia jurídica

<sup>37</sup> Vélez Sarsfield, de hecho, en su Código comentado, en ningún momento hace referencia a la fuente utilizada para el articulado referido a traductores.

<sup>38</sup> No obstante, las nuevas formas delictivas imponen una revisión de esta cuestión.

<sup>39</sup> Los primeros textos, hoy modificados, en muchos casos preveían prisión.

—la independencia cultural y política es lo que sometemos a discusión aquí— dos Constituciones, varios Códigos y leyes.

En el primer caso tenemos una normativa simple de interpretar y de aplicar, aunque ciertamente denuncia por sí misma necesidad de actualización, especialmente en coordinación con el despliegue internacional que la Argentina, como cualquier país del mundo, ha realizado durante todos sus años de país independiente, pero en modo particular en los últimos, en los que el aumento de la cantidad de traducciones y de interpretaciones pone de manifiesto una mayor intensidad de los vínculos internacionales. Es decir, seguiríamos anclados a principios (de la normativa española de la conquista y colonización) e ideas (de la europeización de la Argentina) que en modo sistemático eluden las condiciones locales y callan sobre la necesidad de *aggiornamento* y, quisiéramos, armonización a nivel nacional en un contexto a todas luces internacionalista e internacionalizado, justamente de un sector tan propio de la internacionalización cual es el de la traducción y la interpretación.

Si fuera el caso de la segunda hipótesis —de la copia irreflexiva—, además del *aggiornamento* y la armonización, estaríamos frente a la necesidad insoslayable de elaborar definiciones y prácticas propias, las cuales a su vez demandan un fuerte trabajo académico y claras decisiones políticas y legales.

En ambos casos, creemos, resulta imperativo su tratamiento.

### ***Bibliografía y Referencias bibliográficas***

- Alonso Araguás, Iciar (2003). “Ficción y representación en el discurso colonial: el papel del intérprete en el ‘Nuevo Mundo’”, en: MUÑOZ MARTÍN, Ricardo [ed.] I AIETI. *Actas del I Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación*. Granada 12-14 de febrero de 2003. Granada: AIETI. Vol. nº 1, p. 407-419. ISBN 84-933360-0-9. Versión electrónica disponible en la web de la AIETI: [http://www.aieti.eu/pubs/actas/I/AIETI\\_1\\_IAA\\_Ficcion.pdf](http://www.aieti.eu/pubs/actas/I/AIETI_1_IAA_Ficcion.pdf) (ú.f.c.: 27/11/15).
- Alonso Araguás, Iciar (2005). *Intérpretes de Indias. La mediación lingüística y cultural en los viajes de exploración y conquista: Antillas, Caribe y Golfo de México (1492-1540)*, Tesis doctoral. Disponible en: [https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/116145/2/DTI\\_AlonsoIciar\\_InterpretesIndias.pdf](https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/116145/2/DTI_AlonsoIciar_InterpretesIndias.pdf) (ú.f.c.: 24/08/17). *Apéndice documental*. Disponible en: [https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/116145/1/DTI\\_AlonsoIciar\\_ApendiceDocumental\\_InterpretesIndias.pdf](https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/116145/1/DTI_AlonsoIciar_ApendiceDocumental_InterpretesIndias.pdf) (ú.f.c.: 24/08/17).
- Alonso Araguás, Iciar; Baigorri Jalón, Jesús y Campbell Helen J. L. (eds.) (2012). *Ensayos sobre traducción jurídica e institucional*. Granada, España. Comares.
- Avendaño, S. (compilación de M. Hux) (1999). *Usos y costumbres de los indios de la pampa*, Hux, Meinrado (comp.), Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño (1834-1874), El Elefante Blanco, Buenos Aires.

- Baigorri Jalón, Jesús (2004). “La vuelta al mundo en ochenta lenguas: El intérprete de Magallanes”, HISTAL. Disponible en: <http://www.histal.ca/wp-content/uploads/2011/08/La-vuelta-al-mundo-en-ochenta-lenguas.pdf> (ú.f.c.: 27/11/15).
- Bastin, Georges L. (2003). “Por una historia de la traducción en Hispanoamérica”, – IKALA, Revista de Lenguaje y Cultura, Vol. 8, n° 14, (ene.-dic.2003), p. 193-217 Disponible en: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ikala/article/viewFile/3185/2949> (ú.f.c.: 27/11/15).
- Bastin, Georges L. (2011). “Traductores comprometidos con la independencia: el caso venezolano”, en: *Historia y Sociedad* n° 20, Medellín, Colombia, ene-jun 2011, p. 33-55. ISSN: 2357-4720. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/29582/> (ú.f.c.: 25/11/15).
- Bastin, Georges L. et al. (2004). “La traducción en América Latina: propia y apropiada”, en: Pagni, Andrea (ed.) (2005): *América Latina, espacio de traducciones. Estudios. Revista de Investigaciones Literarias y Culturales* 24, p. 69-94. Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Disponible en: [https://ddd.uab.cat/pub/1611/1611\\_a2014n8/1611\\_a2014n8a7/Georges-Bastin.pdf](https://ddd.uab.cat/pub/1611/1611_a2014n8/1611_a2014n8a7/Georges-Bastin.pdf) y en: <http://documents.mx/documents/la-traduccion-en-america-latina-propia-y-apropiada-bastin-echeverri-campo.html> (ú.f.c.: 25/11/15).
- Bein, Roberto (2005). “La determinación normativa de las traducciones”, en: *Letterature d'America*, Roma, Italia, año XXV, n° 105, p. 21-43. Bulzone.
- Boyd-Bowman, Peter (1971). “El léxico hispanoamericano en el siglo XVI”, AIH, Actas IV, Centro Virtual Cervantes. Disponible en: [http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/04/aih\\_04\\_1\\_021.pdf](http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/04/aih_04_1_021.pdf) (ú.f.c.: 27/11/15).
- Cáceres Würsig, Ingrid (2004). “Breve historia de la secretaría de interpretación de lenguas”, en: *L'histoire de la traduction et la traduction de l'histoire / History of Translation and Translation of History*, Vol. 49, N° 3, p. 609-628, Sous la direction de Georges L. Bastin. Direction: André Clas (directeur), Éditeur: Les Presses de l'Université de Montréal, ISSN: 0026-0452 (imprimé) 1492-1421 (numérique), DOI: 10.7202/009381ar. Disponible en: <http://www.erudit.org/revue/Meta/2004/v49/n3/009381ar.html> (ú.f.c.: 27/11/15).
- Cáceres Würsig, Ingrid y Pérez González, Luis (2003). “Antecedentes históricos y proyección futura de la figura del intérprete jurado en España”, en: *Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación* n° 5. Disponible en: <file:///C:/Users/Ma%20Gabriela/Downloads/Dialnet-AntecedentesHistoricosYProyeccionFuturaDeLaFiguraD-809500.pdf> (ú.f.c.: 30/09/15).
- Carmignani, Leticia Daniela (2013). “Las visitas de los tenientes de naturales a los partidos de pueblos de indios de la gobernación del Tucumán. (1606-1607)”, *Corpus* [En línea], Vol 3, No 2 | 2013, Publicado el 20 diciembre 2013, consultado el 22 noviembre

2015. URL: <http://corpusarchivos.revues.org/548>; DOI: 10.4000/corpusarchivos.548.
- De Cadenas y Vicent, Vicente (1988). *Carlos 1º de Castilla, Señor de las Indias*. Instituto Salazar y Castro, Madrid, España. Hidalguía.
- De la Cuesta, Leonel-Antonio (1992). “Intérpretes y traductores en el descubrimiento y conquista del nuevo mundo”. Disponible en: <http://www.histal.ca/wp-content/uploads/2011/08/Int%C3%A9rpretes-y-traductores-en-el-descubrimiento-y-conquista-del-nuevo-mundo.pdf> (ú.f.c.: 27/11/15).
- Dougnac Rodríguez, Antonio (1994). *Manual de Historia del Derecho Indiano*, cap. 3, México, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Elissalde, Roberto L. (2012). “Reflexiones sobre Belgrano”, en: *Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario*, Año CI – 1518, dic. 2012, ISBN: 0326-2308, p.42-45. Rosario, Argentina.
- Fernández Sánchez, M.M. y Sabio Pinilla, J.A. (2003). “Algunas reflexiones acerca del relato canónico de la historia de la traducción y algunas incidencias en el ámbito peninsular”, en MUÑOZ MARTÍN, Ricardo [ed.] I AIETI. *Actas del I Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación*. Granada 12-14 de febrero de 2003. Granada: AIETI. Vol. nº 1, p. 69-80. ISBN 84-933360-0-9. Disponible en: [http://www.aieti.eu/pubs/actas/I/AIETI\\_1\\_MMFS\\_JASP\\_Reflexiones.pdf](http://www.aieti.eu/pubs/actas/I/AIETI_1_MMFS_JASP_Reflexiones.pdf) (ú.f.c.: 25/07/15).
- Floria, Carlos A. y García Belsunce, César A. (1985). *Historia de los argentinos*. Tomo I. San Vicente dels Horts, España. Kapelusz S.A. para Círculo de Lectores.
- Fossa, Lydia (2004). “Los ‘Lenguas’: Interpretación consecutiva en el siglo XVI”. *Boletín Asociación de Traductores egresados de la Universidad Ricardo Palma nº 4*. HISTAL (Groupe de recherche: Histoire de la traduction en Amérique latine), Université de Montréal. Disponible en: <http://www.histal.ca/wp-content/uploads/2011/08/Los-lenguas-interpretaci%C3%B3n-consecutiva-en-el-siglo-XVI1.pdf> (ú.f.c.: 27/11/15).
- García Yebra, Valentín (1994). *Traducción: Historia y Teoría*. Madrid, España. Gredos.
- Gargatagli, Marietta (2004). « La traducción censurada de América », en *El Trujamán*, Centro Virtual Cervantes. Disponible en: [http://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/octubre\\_04/04102004.htm](http://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/octubre_04/04102004.htm) (ú.f.c.: 02/03/2010).
- Gobello, José (1994). *Nuevo diccionario lunfardo*. Bs. As., Argentina. El Corregidor.
- Isasi Martínez, Carmen (1997). “Traducción y retórica: Notas para la historia de la traducción en España en el siglo XVII”. HISTAL (Groupe de recherche: Histoire de la traduction en Amérique latine), Université de Montréal. *Livius: Revista de estudios de traducción*, ISSN 1132-3191, Nº 10, 1997, p. 77-90. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=171343> (ú.f.c.: 27/11/15).
- Laporte, Alejandra (2004). “Entre la muerte y la deshonra: Traductores e intérpretes de la conquista de América”. HISTAL [en ligne] janvier 2004. <adresse URL. Disponible



- en: [http://www.redaccion-digital.com.ar/entre\\_la\\_muerte\\_y\\_la\\_deshonra.htm](http://www.redaccion-digital.com.ar/entre_la_muerte_y_la_deshonra.htm) (ú.f.c.: 25/07/15).
- Lázara J. A. (Dir.) (1995). *Guía de Estudios Universitarios y Terciarios*, Bs. As., Argentina, Ediciones Guías de Estudio.
- Lozano, Pedro (1733 [1941]). *Gran Chaco Gualamba*, Instituto de Antropología de Tucumán, Argentina. Disponible en: [http://pueblosoriginarios.com/textos/lozano/descrpcion\\_corografica.html](http://pueblosoriginarios.com/textos/lozano/descrpcion_corografica.html) (ú.f.c.: 24/08/17).
- Mariaca Iturri, Guillermo (1993). *El poder de la palabra*. La Paz. Bolivia. Casa de las Américas.
- Moya Espinosa, Reynaldo: *Breve historia de Piura* – Tomo II: “La conquista en Piura”. Disponible en: <http://piuraylaconquista.galeon.com/pvieja09.htm> (Ú.f.c.: 27/02/13).
- Nacach, Gabriela & Navarro Floria, Pedro (2004). « El recinto vedado La frontera pampeana en 1870 según Lucio V. Mansilla » en *Fronteras de Historia* n° 9, p. 233-257, ISSN: 2027-4688, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Colombia. Disponible en : <http://www.redalyc.org/pdf/833/83300907.pdf> (u.f.c.: 28/08/17).
- Nino, Carlos S. (2013 [1983]). *Introducción al análisis del Derecho*. Barcelona, España. Ariel.
- Noejovich, Héctor Omar (1996). *Los Albores de la Economía Americana*, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1ª ed., Lima, Perú. Fondo Editorial.
- Pagni, Andrea (2014a). “Hacia una historia de la traducción en América Latina”, en: *Iberoamericana*, XIV, 56, p. 205-224. Disponible en: <https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/article/view/1152> (ú.f.c.: 20/08/17).
- Pagni, Andrea (2014b). “Los intelectuales-escritores y la importación cultural en Argentina y México entre mediados de los años treinta y fines de los cuarenta. Una aproximación”, en: *La historia intelectual como historia literaria*, Ed. Friedhelm Schmidt-Welle. Ciudad de México: El Colegio de México, p. 129-146.
- Payàs Puigarnau, Gertrudis (2010). *El revés del tapiz: traducción y discurso de identidad en la Nueva España (1521-1821)*. Madrid, España. Iberoamericana.Vervuert.
- Peñarroja Fa, Josep (2000). “Historia de los intérpretes jurados”, en: *Boletín de la Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Cataluña*. Disponible en: <http://atijc.com/es/historia.htm> (ú.f.c.: 28/06/15).
- Piemonti, Ma. Gabriela (en prensa). “El traductor/intérprete en los códigos de fondo y de forma italianos y argentinos. Análisis comparativo”, Asociación de Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana (A.D.I.L.L.I.), Universidad del Salvador, Bs. As., Argentina.
- Piemonti, María G. (2014b). “El que avisa no es traidor” (conferencia), en: Presentación de la Revista “Lapsus Calami” n° 4, Escuela Sigmund Freud, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 13/11/14, Argentina.
- Piemonti, María G. y Pignatta, Adriana (1996). “Formación y superación de profesores, traductores e intérpretes. Situación actual en Argentina” (conferencia), en: *Expolingua Habana '96. Encuentro de Lenguas y Culturas*. La Habana, Cuba, 26/04/96.



- Portillo R., Álvaro (1980). “Notas para una crítica a la teoría general del Derecho”, en: *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* N° 101, Año XXVI, Nueva época. Universidad Nacional Autónoma de México, p. 197-225. Disponible en: <http://alvaroportillo.files.wordpress.com/2011/02/revista-mexicana-de-ciencias-politicas-y-sociales-101.pdf> (ú.f.c.: 03/04/15).
- Pym, Anthony (2012). *Teorías contemporáneas de la Traducción. Materiales para un curso universitario*. Trad. de Noelia Jiménez et al. Intercultural Studies Group. Publisher: Intercultural Studies Group. URV. Av. Catalunya 35. 43002 Tarragona, Spain. [http://isg.urv.es/ISBN-10: 84-695-3092-5 - ISBN-13: 978-84-695-3092-4](http://isg.urv.es/ISBN-10:84-695-3092-5-ISBN-13:978-84-695-3092-4). Disponible en: [http://isg.urv.es/publicity/isg/publications/2011\\_teorias/pym\\_teorias\\_traducccion\\_web.pdf](http://isg.urv.es/publicity/isg/publications/2011_teorias/pym_teorias_traducccion_web.pdf) (ú.f.c.: 12/11/15).
- Ratto, Silvia (2005). “Caciques, autoridades fronterizas y lenguaraces: intermediarios culturales e interlocutores válidos en Buenos Aires (primera mitad del siglo XIX)”, en: *Mundo Agrario. Revista de estudios rurales*, vol. 5, n° 10, ene. /jun. 2005, Centro de Estudios Histórico Rurales. Universidad Nacional de La Plata. Versión On-line ISSN 1515-5994. Disponible en: [http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1515-59942005000100008](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942005000100008) (ú.f.c.: 27/11/15).
- Sánchez Domingo, Rafael (2012). “Las Leyes de Burgos de 1512 y la Doctrina Jurídica de la Conquista”, en: *Historia del Derecho. Revista Jurídica de Castilla y Aragón* N° 28. Sept. 2012 Issn: 2254-3805 ISSN 2254-3805. Disponible en: [file:///C:/Users/Ma%20Gabriela/Downloads/Sanchez+Domingo-Leyes+de+Burgos%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Ma%20Gabriela/Downloads/Sanchez+Domingo-Leyes+de+Burgos%20(2).pdf) (ú.f.c.: 22/11/15).
- Santoyo, Julio César (1994). “El siglo XIV: Traducciones y reflexiones sobre la traducción”, en: *Livius Revista de Estudios de Traducción*. Universidad de León, Departamento de Filología Moderna, vol. 6, p. 17-34.
- Sosa, Norma (2001). *Mujeres indígenas (de la Pampa y la Patagonia)*, Bs. As., Argentina, Emecé Editores.
- Tau Anzoátegui, Víctor y Martiré, Eduardo (1980 [1967]). *Manual de Historia de las Instituciones Argentinas*, 4ª ed., Bs. As. Argentina. Ediciones Macchi.
- Valero Garces, Carmen (1996). “Traductores e intérpretes en los primeros encuentros colombinos. Un nuevo rumbo en el propósito de la Conquista”, en: *Hieronymus Complutensis*, 3: 61-73. Disponible en: [http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/03/03\\_061.pdf](http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/03/03_061.pdf) (ú.f.c.: 27/11/15).
- Vega Cernuda, Miguel Ángel (2004). “Lenguas, farautes y traductores en el encuentro de los mundos. Apuntes para una historia de la comunicación lingüística en la época de los descubrimientos en la América protohispana”, en: *Hieronymus n° 11*, Centro Virtual Cervantes, p.79-108. Disponible en: [http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/11/11\\_081.pdf](http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/11/11_081.pdf) (ú.f.c.: 27/11/15).
- Videla, Liliana Eva M. (2007). “María, cacica de los Tehuelches”, en: *Todo es Historia*, n° 477, Bs. As., Argentina, p. 29-30.

Witthaus, Rodolfo E. et. al. (2000). *Régimen legal de la Traducción y del Traductor Público*. Bs. As. Argentina. Abeledo Perrot.